

sufrieron los acusadores de Olivares y Suarez, sin embargo de no encontrarse á gran distancia de la fuerza armada, y cuya circunstancia si bien no prueba que el crimen se cometiera en lugar poblado, sí acredita el arrojé de los ladrones, del que sabrá hacer el mérito debido el Juez que haya de sentenciarlos. Que estando suspensas las garantías individuales de que habla la citada ley en su artículo primero, y el C. Gobernador del Distrito obligado á seguir el procedimiento especial designado en ella, no existe la violación de que hacen mérito los patronos de los reos. Por cuyas consideraciones debía de declarar y declaro: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Andres Olivares y á Cayetano Suarez, contra el acto que motiva este recurso. Notificada la sentencia y hecha su publicación en la forma acostumbrada, dese cuenta á la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El C. Juez de Distrito lo mandó y firmó. Doy fé.—*José A. Bucheli.*—*F. de A. Osorno*, secretario.

Es copia que certifico.—*F. de A. Osorno*, secretario.

### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Mayo 31 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el juzgado 1º de Distrito de esta ciudad por los defensores de Andres Olivares y Cayetano Suarez, contra el Gobernador del Distrito que los juzga como ladrones en despoblado, por estar acusados de haber asaltado y robado á Mr. Enrique Fresarién, á su hijo y á su criado, la tarde del 16 de Febrero último, en el tramo que hay entre la calzada de la Reforma y la curva del ferro-carril de Tlalpam; y considerando: que según las constancias del expediente, el Gobernador del Distrito procede dentro de la órbita de sus facultades, y por consiguiente, que su

procedimiento no vulnera ninguna de las garantías que invocan los quejosos; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 101 de la Constitución federal, se decreta: que se confirma la sentencia pronunciada respecto de este juicio el 3 del actual por el Juez 1º de Distrito de esta ciudad, que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege á Andres Olivares y á Cayetano Suarez, contra el acto que motiva este recurso.—Devuélvase sus actuaciones al juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia, para los efectos consiguientes: publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.—Así por mayoría de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogasón.*—*Juan J. de la Garza.*—*José María Lozano.*—*José Arteaga.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Azañ.*—*Simón Guzmán.*—*Luis Velasco.*—*M. Zavala.*—*José García Ramírez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Junio 11 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes por el C. Rosalío Delgado contra el C. Administrador de contribuciones directas del Estado por violación de garantías.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito:

Estando dispuesto en el art. 8º de la ley de 20 de Enero de 1869, que no cabe el amparo en negocios judiciales, á cuya clase

corresponda la cuestion de si debe ó no sujetarse al C. Rosalío Delgado, á los procedimientos del recaudador de contribuciones de la Capital, por materia de un cobro que le hizo, segun consta á fojas 8 de este juicio; el que suscribe cree inadmisibile el recurso que se intenta, y en tal virtud opina porque se deseché, condenándose al promovente á la multa que impone el art. 16 de la misma ley de 20 de Enero de 1869.

Aguascalientes, Enero 28 de 1873.—  
*I Ocadiz.*

### *Sentencia del C. Juez de Distrito.*

Aguascalientes, 10 de Mayo de 1873. Visto este juicio de amparo que promovió el C. Rosalío Delgado, casado, mayor de edad y vecino de este Estado, contra el administrador de contribuciones directas D. José M. Guerrero, de quien se queja que expidió un mandamiento de embargo para satisfacer los adeudos que tanto el quejoso como su esposa debian al Estado por dichas contribuciones, sin embargo de no estar conforme con la cantidad reclamada, ni con la competencia de dicho administrador, por ser su nombramiento, segun se expresa, anticonstitucional, por serlo el de las autoridades de donde procede. Visto así mismo el informe rendido de aquel empleado; el pedimento fiscal; las pruebas y alegatos; la citacion para sentencia, y por último, el dictamen del C. asesor Lic. Joaquín del Peral, nombrado con anuencia de las partes interesadas para la resolución definitiva de éste negocio, cuyo dictamen á la letra dice: "Sr. Juez de Distrito suplente.—D. Rosalío Delgado, mayor de edad, casado, vecino del Estado y agricultor, se presentó á ese Juzgado de Distrito el 25 de Enero próximo pasado, pidiendo amparo contra el mandamiento de embargo, que el C. Recaudador de contribuciones directas expidió para hacer efectivo el pago de las

TOMO IV.—PARTE II.

que á esa fecha adeudaba el Sr. Delgado, por sí y por la señora su esposa.

Apoya su instancia, en la incompetencia del empleado que decretó el mandamiento, cuya incompetencia procede de la inconstitucionalidad de las autoridades todas del Estado, y como por concomitancia se apoya tambien en la prescripcion del art. 39 de la ley de 20 de Noviembre de 1837, que resuelve el incidente de conformidad, en las liquidaciones de adeudos por los contribuyentes. Considera violadas en su persona las garantías que otorga á los ciudadanos la Constitucion de la República, en sus arts. 16 y 27 y se confiesa deudor, aunque inconforme en la liquidacion de sus contribuciones vencidas en aquella fecha. Se nota desde luego, por la lectura del expediente, que el Sr. Delgado es un ciudadano próbo, que ha tenido con el C. Recaudador algun motivo de disgusto, y que aquella honrosa cualidad, y ésta circunstancia, han servido de instrumento á quien, suponiendo en aquellos artículos de la Constitucion una inteligencia absurda, no tuvo otro objeto ostencible que desahogar sus malas pasiones contra las autoridades constituidas, empleando armas de mala ley, y poder esquivar á mansalva responsabilidades personales.

El art. 16 de la Constitucion de la República otorga la inviolabilidad de la persona, familia etc. atacada por quien no sea autoridad competente; las autoridades constituidas no atacan los derechos de los ciudadanos cuando ejercen su imperio mixto; cumplen con su deber. El 27 se contrae única y exclusivamente á la expropiacion por causa de utilidad pública; y confundir la expropiacion sin ó con causa de utilidad pública, con el secuestro por causa de pago de una deuda fiscal, es un absurdo; mas, es una barbaridad.

Pero este dictamen, no es un alegato de buena prueba, sino la expresion del juicio que se forma de los hechos que han servido de fundamento á la instancia entablada

por D. Rosalío Delgado, para ampararse bajo la protección de la Justicia de la Unión y salvar sus garantías individuales. El individuo que solicite amparo, explicará por menor el hecho que motiva su solicitud y designará la garantía individual que considere violada, (art. 4º de la ley de 20 de Enero de 1869.) ¿Cuál es el hecho que motiva la queja del Sr. Delgado? Un mandamiento de embargo expedido por el C. Recaudador de contribuciones, para hacer efectivo el pago de las adeudadas por el quejoso. ¿Cuál la garantía violada? El derecho de propiedad.

Es obligación de todo mexicano (art. 31 frac. 2º de la Constitución General) "Contribuir para los gastos públicos, así de la federación como del Estado y municipio en que resida." ¿Cómo conciliar este precepto Constitucional, con la pretensión del Sr. Delgado, para que la Justicia federal liquide sus adeudos á la hacienda del Estado, supuesto que no los niega, y está entendido que esas atribuciones pertenecen al Juez de hacienda? Supuesta la inconformidad del Sr. Delgado, únicamente en la liquidación de su adeudo ¿De donde deduce la obligación del C. Recaudador para ocurrir al Juez de hacienda del Estado en solicitud de su autoridad para resolver sobre la inconformidad? En la inconstitucionalidad de las autoridades todas, dice, sustituye á ellas la federal; pero lo que no dice es con la facultad que hace esta sustitución.

Inútil y hasta prolijo sería enumerar los errores de derecho que envuelve la queja del Sr. Delgado; lo expuesto creo bastante para consultar á vd., que juzgando definitivamente en el presente recurso, falle de conformidad con el pedimento del C. fiscal con las proposiciones siguientes: Primera; la Justicia de la Unión no ampara ni protege en el presente recurso de amparo á D. Rosalío Delgado. Segunda: no le impone la multa prevenida por la ley que norma los procedimientos en estos recursos,

por ser facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia. Tercera: se condena á D. Rosalío Delgado á pagar las costas y honorarios de los señores asesores. Cuarta: notifíquese esta sentencia al ciudadano fiscal y al actor. Quinta: publíquese por el periódico oficial y sin otra citación remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia para su revisión.

Aguascalientes, Mayo 6 de 1873.—*Lic. Joaquín Peral.*

En vista del incerto dictamen, el Juez que suscribe, de conformidad con sus fundamentos legales y proposiciones con que concluye, declara: Primera: la Justicia de la Unión no ampara ni protege en el presente recurso á D. Rosalío Delgado. Segunda: no se le impone la multa prevenida por la ley que norma los procedimientos en estos recursos, por ser facultad exclusiva de la Suprema Corte de Justicia. Tercera: se condena á D. Rosalío Delgado á pagar las costas y honorarios de los señores Asesores. Cuarta: notifíquese esta sentencia al C. fiscal y al actor. Quinta: sáquense las copias para su publicación en los periódicos, según está mandado; repóngase por la parte el papel común que se ha usado con el del sello correspondiente y sin otra citación, remítanse los autos á la Suprema Corte de Justicia, para su revisión.

El C. Antonio Morfín, Juez tercero suplente de Distrito, así lo proveyó y firmó. Doy fé.—*Antonio Morfín.*—*Silviano Arceaga.*

#### *Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.*

México, Junio 3 de 1873.—Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Aguascalientes, por D. Rosalío Delgado, contra el Administrador de contribuciones directas del Estado, que mandó satisfaciéndose el quejoso las que debe por

sí y por su esposa, disponiendo que si no se verificaba el pago se procediese al embargo respectivo de los bienes y al remate de ellos; y Considerando: que en el expediente aparece, que Delgado se opuso al pago diciendo, que la cantidad que se le cobraba no era la debida, con lo cual dió lugar á que el punto se convirtiera en contencioso: que la ley de Hacienda del Estado de Aguascalientes, al conceder á los cobradores de contribuciones la facultad de rematar bienes de los causantes, no puede tener efecto, sino en el caso de que no se ofrezca contienda, como es de interpretarse conforme á la Constitucion, supuesto que las funciones judiciales no pueden encomendarse á la autoridad administrativa: que de esto resulta, que el Administrador de contribuciones de Aguascalientes se ha excedido en el uso de sus atribuciones al disponer el remate de los bienes de Delgado, por carecer de toda facultad judicial, quedando por lo mismo violadas en la persona del promovente, las garantías consignadas en el artículo 16 de la Constitucion general; y Considerando ademas: que con arreglo á la misma, la Administracion de Justicia es gratuita; de conformidad con lo que dispone en el artículo 101, se decreta:—1º: Que se reforma la sentencia pronunciada respecto de esto juicio, el 10 de Mayo próximo pasado, por el Juez de Distrito de Aguascalientes, en la parte que declara: que la Justicia de la Union no ampara ni protege en el presente recurso á D. Rosalío Delgado.—2º: La Justicia de la Union, ampara y protege á D. Rosalío Delgado, contra los actos posteriores al embargo.—3º: Se revoca dicha sentencia en la parte que condena á la de Delgado al pago de las costas y de los honorarios del Asesor.—4º: Lo acordado. Devuélvanse sus actuaciones al Juzgado de que proceden, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así por unanimidad de votos lo decretaron los CC. Presidente y Ministros que for-

maron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados-Unidos Mexicanos y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*J. M. Lozano.*—*José Arteaga.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*J. M. del Castillo Velasco.*—*M. Auza.*—*Simon Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*J. Garcia Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Es copia que certifico. México, Agosto 14 de 1873.—*Lic. Enrique Landa*, oficial mayor.

## AMPARO

*Promovido ante el Juzgado de Distrito de Puebla, por Pedro Raso, contra su consignacion al servicio de las armas.*

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

En el presente juicio, el soldado Pedro Raso ha justificado de un modo legal, que fué consignado al ejército contra su voluntad por disposición del Comandante del cuerpo número 15 de Caballería, quien carece de facultades para dar esas determinaciones.

Este hecho es atentatorio y viola las garantías que á todo hombre otorga el artículo 5º de la Constitucion federal. En consecuencia, es de amparársele con arreglo á la ley de 20 de Enero de 1869.

El Promotor pues, en vista de lo actuado, y con fundamento de la ley citada, pide á V. que se sirva decretar el amparo en los términos que lo solicita el promovente, por ser de justicia.—Zaragoza, Mayo 15 de 1873.—*M. Sanchez.*